

Acuerdo de 17 de diciembre de 2020, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, sobre la adopción de medidas provisionales, en relación con el expediente de contratación del servicio “Gestión del complejo asistencial de Vallecas para personas mayores afectadas de la enfermedad de Alzheimer (Residencia, centro de día y centro de formación de la Consejería de Políticas Sociales, Familiar, Igualdad y Natalidad, número de expediente 186/2020.

Con fecha 4 de diciembre de 2020 se ha recibido en este Tribunal escrito de la representación legal del sindicato Progreso y Autonomía (en adelante PROGRESA), formulando recurso especial en materia de contratación, contra el anuncio y los pliegos de la licitación de referencia que fueron publicados en la Plataforma de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid el día 13 de noviembre de 2020.

La recurrente formula su escrito en base a los posibles errores en el cálculo del presupuesto base de licitación y en relación al personal a subrogar en este contrato. No solicita la adopción de medidas cautelares.

El artículo 51.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP) establece que en el escrito de interposición se hará constar el acto recurrido, el motivo que fundamenta el recurso, los medios de prueba de que pretende valerse el recurrente y en su caso las medidas de naturaleza cautelar cuya adopción solicite.

Recibido del Órgano de contratación el 11 de diciembre de 2020 la remisión del expediente y del preceptivo informe establecido en el artículo 56.2 de la Ley de



Contratos del Sector Público, sin oponerse a la adopción de medida cautelar, este Tribunal considera de oficio la pertinencia de su acuerdo.

La suspensión automática del expediente de contratación en fase de adjudicación, tiene por objeto evitar que con la formalización del contrato se puedan consolidar situaciones de ilegalidad e impedir que se causen otros perjuicios a los interesados afectados, tal y como aparece configurada ya en el artículo 2.3 de la Directiva 89/665/CE (redacción actual dada por la Directiva 2007/66/CE), que dispone la suspensión del procedimiento como garantía de que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato cuando el recurso se plantee contra la decisión de adjudicación de un contrato *“Cuando se someta a un órgano de primera instancia independiente del poder adjudicador un recurso referente a una decisión de adjudicación de un contrato, los Estados miembros garantizarán que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato hasta que el órgano que examine el recurso haya tomado una decisión sobre la solicitud de medidas provisionales o sobre el fondo del recurso”*.

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la adopción de la medida cautelar exige que el recurso pueda perder su finalidad legítima, lo que significa que, de ejecutarse el acto, se crearían situaciones jurídicas irreversibles haciendo ineficaz la sentencia (en este caso resolución) que se dicte, e imposibilitando el cumplimiento de la misma en sus propios términos, con merma del principio de identidad. Aun concurriendo el anterior presupuesto, puede denegarse la medida cautelar siempre que se aprecie perturbación grave de los intereses generales o de tercero, lo que obliga a efectuar siempre a un juicio comparativo de todos los intereses en juego, concediendo especial relevancia, a la hora de decidir, a la mayor perturbación que la medida cause al interés general o al de un tercero afectado por la eficacia del acto impugnado; y, en todo caso, el juicio de ponderación que al efecto ha de realizar el órgano jurisdiccional debe atender a las circunstancias particulares de cada situación, y exige motivación acorde con el proceso lógico efectuado para justificar la adopción o no de la medida cautelar solicitada.



Por otro lado, el recurso especial en materia de contratación tiene como finalidad obtener una resolución rápida y eficaz, de manera que una decisión ilegal no se pueda consolidar por la perfección del contrato.

Esta misma argumentación relativa a la fase de adjudicación, nos sirve también para justificar la adopción de medidas cautelares en supuestos en que, como en el presente, no se impugna la resolución de adjudicación, sino algún otro de los actos objeto del recurso, cuando el estado de la tramitación del expediente coloca al mismo en una situación similar.

En este caso y como establece el apartado 4 del artículo 49 de la LCSP *“Salvo que se acuerde lo contrario por el órgano competente, la suspensión del procedimiento que pueda acordarse cautelarmente no afectará al plazo concedido para la presentación de ofertas o proposiciones por los interesados”*. Por lo que en este momento del procedimiento no cabe la suspensión de la tramitación.

Dado que el plazo de presentación de ofertas finalizó el día 14 de diciembre y que está prevista la celebración de la Mesa de contratación que conocerá de las ofertas valorables de forma automática el próximo día 22 de diciembre y que será muy posible que se alcance esa fecha con anterioridad a la resolución del recurso, este Tribunal considera conveniente que previamente se haya decidido sobre el fondo del asunto.

El recurso especial en materia de contratación tiene como finalidad obtener una resolución rápida y eficaz, de manera que una decisión ilegal no se pueda consolidar, y con la suspensión de la tramitación del expediente de contratación en este supuesto se trata de evitar la posibilidad de causar perjuicios a los interesados afectados y, que, en su caso, se facilite la retroacción de las actuaciones al momento en que se cometió la posible infracción.

De acuerdo con lo anterior, ponderadas las circunstancias del caso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 de la LCSP, este Tribunal por unanimidad,



ACUERDA

Suspender la tramitación del procedimiento de adjudicación del contrato del servicio “Gestión del complejo asistencial de Vallecas para personas mayores afectadas de la enfermedad de Alzheimer (Residencia, centro de día y centro de formación de la Consejería de Políticas Sociales, familias, Igualdad y Natalidad, número de expediente 186/2020, hasta que se resuelva el recurso y se acuerde expresamente el levantamiento de la suspensión.

Contra el presente Acuerdo no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de los que procedan contra la resolución que se dicte en el procedimiento principal.

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **103699695363650885235**